SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 329

2 de febrero de 2009

Presentado por la señora *Burgos Andújar*

Referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura

LEY

Para añadir un sub inciso (a1) al inciso (a) del Artículo 2, y enmendar el Artículo 30 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a los fines de establecer la naturaleza y extensión de los servicios de seguridad y protección a determinados funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; definir Agente en calidad de escolta: y para disponer sobre su vigencia y aplicación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Llevando a cabo de manera integral las funciones de seguridad pública, se pueden alcanzar los fines de ésta y, por consiguiente, el bienestar de la población. Asimismo, en condiciones de orden, paz y estabilidad, un país puede alcanzar niveles de desarrollo mayores. Por ser está una función tan importante y con tantas implicaciones, es necesario que se revisen las disposiciones de la Ley de la Policía que afectan el presupuesto y desvían recursos privando a la ciudadanía de la mayor protección.

La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", tiene como uno de sus propósitos establecer para hacer más ágil la administración y la utilización de sus recursos. Para ello se crea un organismo civil con la obligación de proteger a las personas y a la propiedad, y mantener y conservar el orden público. La Policía de Puerto Rico tiene, además, el deber de observar y procurar la más absoluta

protección de los derechos civiles del ciudadano; prevenir, descubrir y perseguir el delito; y compeler la obediencia a las leyes.

La autoridad suprema en cuanto a la dirección de la Policía se ejerce por el Gobernador de Puerto Rico. La administración y dirección inmediata de la organización está delegada en un Superintendente a quien la Ley confiere amplias facultades y atribuciones.

La Ley Núm. 53 (*supra*) establece, entre los múltiples deberes asignados a la Policía la prestación de servicios de seguridad y protección a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ésto se realiza mediante la asignación de escoltas y otros recursos. El Artículo 30, de la referida Ley, regula los servicios específicos de seguridad y protección para el Gobernador de Puerto Rico y su familia, así como, para el Superintendente de la Policía y su familia. También dispone para la prestación de tales servicios a los ex Superintendentes, por un término de cuatro (4) años después que cesen en funciones. Tales servicios serán de la misma naturaleza que los ofrecidos durante su incumbencia. Con lo que implica, en términos de impacto en el presupuesto de la Policía. Basta recordar que tan solo en el Cuatrienio de 2001-2004 hubo cuatro Ex-Superintendente que cualificaron para el mencionado servicio. Peor aún, es tomar conocimiento de que al último Ex-Superintendente Lcdo. Pedro Toledo, sus servicios de escolta ascienden a más de medio millón de dólares (\$500,000.00).

En cuanto a los demás funcionarios y ex funcionarios públicos, del estatuto actual no surge que estos tengan derecho absoluto a recibir el servicio de escolta, seguridad y protección. Si ha éstos se le concede este privilegio tendrán derecho a recibirlo en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si tales servicios se solicitan para ser prestados fuera de la jurisdicción, éstos se proveerán si media el consentimiento del Superintendente y del Gobernador. Es decir, podemos interpretar que existe una discreción, ya sea del Superintendente o del Gobernador de Puerto Rico, de otorgar escoltas a funcionarios o ex – funcionarios, y que éstos siempre han tenido la autoridad para rechazar u otorgar estos servicios, según sea la necesidad fiscal y de seguridad de nuestro País.

El tema de las escoltas policíacas a funcionarios y ex funcionarios gubernamentales ha sido motivo de amplia discusión pública. Se destaca por demás, la asignación de fondos del erario para cubrir tales servicios en contraposición a los reclamos de la ciudadanía de más y mejores servicios para promover su seguridad y calidad de vida. El uso de cifras millonarias para servicios de escolta y la falta de normas más específicas y prudentes que rijan su uso, obligan a

esta Asamblea Legislativa a revisar las disposiciones de la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, sobre esta materia. Mas aún, cuando el impacto al presupuesto por los gastos en escolta incluyen sueldo, horas extras, concesión de hasta tres pasos de aumento de sueldo por riesgo, pago suplementario para vestimenta civil, gastos de viajes, alojamiento, vehículo, combustible, peaje, seguro, y adiestramiento especializado, entre otros gastos.

La pasada Administración de Gobierno eliminó los servicios de escolta a los Ex – Gobernadores lo que ha tenido el efecto de ahorrar sobre dos millones cuatrocientos mil dólares (\$2, 400,000.00) anuales, según datos ofrecidos por la misma.

Durante años se ha desvirtuado y confundido el propósito de la escolta, convirtiendo la misma en choferes. Por su naturaleza de servicio no es lo mismo ya que la posición de chofer no requiere un entrenamiento de la Academia de la Policía, ni ser certificado por tomar adiestramiento especializado en seguridad de dignatarios. La Ley Núm. 102 de 27 de junio de 1969, según enmendada, define “chofer” como toda persona natural autorizada de acuerdo con la Ley para conducir vehículos de motor mediante una licencia de chofer o de conductor de vehículos pesados de motor dedicados a la transportación de personas, animales o cosas mediante retribución, sueldo, jornal, paga o cualquier otra forma de compensación, ya se obtenga a base de por ciento, combinación de salario y otras facilidades o servicios, o mediante la operación de un vehículo arrendado, y que conduzca dichos vehículos por vías públicas, caminos y propiedades privadas como parte de su ocupación o modo de ganarse su sustento. Incluye, además, a la persona que es dueña de un vehículo de motor dedicado, por autorización de la Comisión de Servicio Público, al servicio de transporte público de personas, carga, animales o cosas y que esté autorizada dicha persona por el Departamento de Transportación y Obras Públicas como chofer para ofrecer dicho servicio público.

La presente pieza legislativa mantiene la disposición vigente en torno a los servicios de seguridad y protección para el Gobernador de Puerto Rico y su familia, y aclara el alcance de la misma. Las disposiciones que aplican a los demás funcionarios públicos se han revisado, para que la autorización de los servicios se haga tomando en consideración factores como la existencia de peligro o riesgo inminente contra la vida, el cargo público que ostenta u ostentó la persona, la disponibilidad de personal, equipo y vehículos; y la suficiencia de fondos para sufragarlos.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera que la presente Ley cumple con la

política pública de realizar ajustes en el gasto público para que más recursos se dirijan a la prestación de servicios directos a la ciudadanía. Por ello, el mecanismo que se establece para la concesión de servicios de seguridad y protección a funcionarios y ex funcionarios públicos permitirá el uso responsable de los recursos administrativos y económicos del Gobierno, sin afectar los servicios básicos que el Estado debe proveer al Pueblo Puertorriqueño.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 **Artículo 1.-** Se añade un sub inciso (a1) inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 53
2 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue:

3 (a) “Agente de la Policía” significa todo miembro de la Policía nombrado como tal,
4 luego de aprobar el adiestramiento básico dispuesto por el Superintendente.

5 (a1) “*Agente de la Policía en Calidad de Escolta*” significa *Agente de la fuerza,*
6 *debidamente adiestrado por la Academia de la Policía, encargado de ofrecer seguridad y*
7 *protección a Mandatarios, Jefes de Agencias, Superintendentes y otras personalidades.*
8 *Además, posee un adiestramiento especializado de seguridad y certificado de protección a*
9 *dignatarios, cuya misión es acompañar a los funcionarios a los que presta seguridad,*
10 *velando por su vida y seguridad.*

11 **Artículo 2.-** Se enmienda el Artículo 30 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996,
12 según enmendada, para que se lea como sigue:

13 Artículo 30.- *Seguridad y Protección a [Gobernador, Superintendente,*
14 **funcionarios y ex – funcionarios-] Funcionarios y Ex - Funcionarios**

15 *Los servicios de seguridad y protección a los siguientes funcionarios y ex*
16 *funcionarios se regirán por lo dispuesto en este Artículo:*

17 ***Rama Ejecutiva***

1 **(a) Gobernador-** La Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de proveer
2 seguridad y protección al Gobernador de Puerto Rico y a su familia, durante el término de su
3 incumbencia. *Este servicio cobijará únicamente al cónyuge y a los hijos e hijas menores de*
4 *edad. Cuando el Gobernador no tuviese cónyuge, el servicio se extenderá a la persona mayor*
5 *de edad que desempeñe las funciones que tradicionalmente se delegan en el cónyuge.*

6 *La totalidad de los recursos destinados a servicios de seguridad y protección del*
7 *Gobernador y su familia se cargarán al presupuesto de gastos de funcionamiento de la*
8 *Policía de Puerto Rico.*

9 **(b) Secretario de Estado** - La Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de
10 *proveer seguridad y protección al Secretario de Estado, durante el término de su*
11 *incumbencia. Por disposición constitucional este funcionario sustituye al Gobernador de*
12 *Puerto Rico cuando se produce ausencia de carácter transitorio y temporal.*

13 *La totalidad de los recursos destinados a servicios de seguridad y protección del*
14 *Secretario de Estado se cargarán al presupuesto de gastos de funcionamiento de la Policía*
15 *de Puerto Rico.*

16 **(c) Superintendente** - **[Además,]** La Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad
17 de proveer seguridad y protección al Superintendente y a su familia, durante el término de su
18 incumbencia. *Este servicio cobijará únicamente al cónyuge y a los hijos e hijas menores de*
19 *edad. [Dicho servicio continuará, una vez éste cese en funciones por cuatro (4) años*
20 **adicionales y podrá ser extendido previa solicitud y aprobación del Superintendente que**
21 **lo sustituya.**

22 **La naturaleza del servicio de protección al ex Superintendente será similar a la ofrecida**
23 **durante su incumbencia como Superintendente.]**

1 *La totalidad de los recursos destinados a servicios de seguridad y protección del*
2 *Superintendente se cargarán al presupuesto de gastos de funcionamiento de la Policía de*
3 *Puerto Rico.*

4 **(d) [Aquellos funcionarios] Funcionarios o ex –funcionarios [quienes] –**

5 *La Policía de Puerto Rico brindará servicios de seguridad y protección a*
6 *funcionarios o ex funcionarios, previa autorización del Gobernador de Puerto Rico que*
7 *cumplan con las condiciones establecidas en este inciso.*

8 *Los funcionarios y ex funcionarios vendrán obligados a solicitar tales servicios al*
9 *Gobernador, quien dispondrá de dicha petición tomando en consideración la recomendación*
10 *del Superintendente. Éste determinará si se justifica la concesión de tales servicios*
11 *atendiendo factores como la existencia de peligro o riesgo inminente contra la vida, el cargo*
12 *público que ostenta u ostentó, la disponibilidad de personal, equipo y vehículos; y la*
13 *suficiencia de fondos para sufragarlos.*

14 *El Superintendente someterá un informe al Gobernador de Puerto Rico con sus*
15 *conclusiones y recomendaciones, exponiendo los hechos que dan base a la solicitud, su*
16 *recomendación a favor o en contra de la prestación de los servicios, el término por el cual se*
17 *deben prestar los mismos que no excederá de seis (6) meses, el tipo y la cantidad de escolta a*
18 *ofrecerse.*

19 *Los servicios de escolta se cargarán al presupuesto de la dependencia u organismo*
20 *gubernamental del funcionario o ex funcionario. El Superintendente deberá acompañar con*
21 *su informe una certificación acreditativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la*
22 *dependencia u organismo concerniente, de la disponibilidad de los fondos.*

1 *Aquellos funcionarios o ex funcionarios a quienes la policía les provea servicio de seguridad*
2 *y protección sólo tendrán derecho a recibirlo en la jurisdicción o territorio de Puerto Rico.*

3 ***Rama Legislativa***

4 ***(e) Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes - La Policía de Puerto***
5 ***Rico tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección a los Presidentes de ambos***
6 ***Cuerpos Legislativo, durante el término de sus incumbencias.***

7 ***Artículo 3.- Informe Especial***

8 *Dentro de un término de sesenta (60) días, contados a partir de la vigencia de esta*
9 *Ley, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico tendrá la obligación de rendir un*
10 *Informe Especial al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, que detalle los ajustes,*
11 *notificaciones y trámites realizados para dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley. El*
12 *informe incluirá datos comparativos fiscales con la implantación de esta Ley.*

13 ***Artículo 4.- Informe Anual sobre Servicios de Seguridad y Protección.-***

14 *No más tarde del 31 de enero de cada año, la Policía de Puerto Rico en conjunto con la*
15 *Oficina de Gerencia y Presupuesto someterán un Informe Anual al Gobernador y a la*
16 *Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sobre los servicios de seguridad y protección. Dicho*
17 *informe incluirá, sin que se entienda como una limitación, los nombres de los funcionarios y*
18 *ex funcionarios a quienes se les ha brindado servicios de seguridad y el costo detallado de*
19 *los servicios.*

20 ***Artículo 5.- Aplicación***

21 *Dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de esta Ley, el*
22 *Superintendente de la Policía de Puerto Rico tendrá que ajustar la naturaleza de los*
23 *servicios de seguridad y protección de acuerdo a los parámetros de esta Ley.*

1 **Artículo 6.-Cláusula de Separabilidad**

2 Si cualquier Artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese declarada
3 inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderá que el resto de sus
4 disposiciones mantendrán su validez y vigencia.

5 **Artículo 7.- Vigencia**

6 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.